

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO

Santiago de Cali, dieciocho (18) de mayo de dos mil veinte (2020)

Radicación No.	76001-23-33-000-2020-00650-00
Medio de Control:	CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Solicitante:	MUNICIPIO DE ULLOA
Solicitud:	DECRETO No. 036 DEL 13 DE MAYO DE 2020

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ

I. ANTECEDENTES

La administración municipal del Municipio de Ulloa, Valle del Cauca, mediante correo electrónico calendarado el 14 de mayo de 2020, remite para el trámite de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011¹, el Decreto No. 036 de mayo 13 de 2020 “**Por medio del cual se reglamentan las sesiones presenciales ordinarias del mes de mayo de 2020 del Concejo Municipal de Ulloa Valle**”, expedido por el Alcalde Municipal del municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

1. Por reparto realizado el 15 de mayo de 2020, el asunto le correspondió a este Despacho, como sustanciador, para el trámite de rigor.
2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 185 del CPACA “La sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena”.

II. CONSIDERACIONES:

1. Competencia

Esta Corporación tiene competencia para conocer del escrito de control inmediato de legalidad, de acuerdo con el artículo 151 del CPACA, que señala:

“ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en **única** instancia:

¹ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.

14. **Del control inmediato de legalidad** de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa **durante los Estados de Excepción** y **como desarrollo de los decretos legislativos** que fueren dictados **por autoridades territoriales departamentales y municipales**, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan”.

En igual dirección, el artículo 20 de la Ley 137 de 1994² preceptúa:

“ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, **ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales** o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. (...)”. (Negritas fuera de texto original).

2. Oportunidad

Según el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 137 de 1994, “(...) Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.

Prima facie observa este Despacho, que el Decreto No. 036 fue expedido el 13 de mayo de 2020; no obstante, se debe precisar que mediante los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20- 11521 y PCSJA20-11526 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura se suspendieron los términos de las actuaciones judiciales y estableció algunas excepciones, dentro de las cuales no contempló este medio de control.

Posteriormente, mediante Acuerdo PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020 “Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos” se resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Exceptuar de la suspensión de términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en los acuerdos PCSJA20-11517, 11521 y 11526 de marzo de 2020, las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en los artículos 111, numeral 8, 136 y 151, numeral 14, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

De esta forma, habiéndose reactivado los términos para conocer del control inmediato de legalidad de actos administrativos el 25 de marzo de 2020 y habiéndose expedido el decreto en cuestión por parte de la Alcaldía del Municipio de Ulloa, el 13 de mayo de 2020, y remitido posteriormente mediante correo electrónico, el 14 de mayo de 2020, se puede colegir sin asomo de duda que este fue radicado en forma oportuna.

² “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”.
Exp. Rad. No. 76001-23-33-000-2020-00650-00

Valga precisar que este asunto fue repartido el 15 de mayo de 2020 y fue remitido por parte de la Secretaría del Tribunal, al correo institucional del suscrito magistrado ese mismo día. Por lo que, esta Sala Jurisdiccional Unitaria de Decisión, aprehenderá su conocimiento de conformidad con las precitadas normas, a efectos de verificar si evidentemente dicho acto resulta pasible del control inmediato de legalidad.

3. Marco normativo

Los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política permiten que el Presidente de la República declare, mediante decreto que deberá tener la firma de todos los ministros y con la debida motivación, el Estado de Excepción, ya sea por: i) Guerra Exterior, ii) Conmoción Interior o iii) Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Una vez efectuada la declaratoria, el Presidente puede expedir decretos legislativos (gozan de fuerza de ley), que tienen que estar suscritos por todos los ministros y deberán referirse a materias que guarden relación directa y específica con el Estado de Excepción.

Como uno de los mecanismos para garantizar el correcto ejercicio de esas facultades, el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 estableció un control automático de los decretos legislativos, que estará a cargo de la Corte Constitucional. A su vez, el artículo 20 dispuso que:

“ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.

El control de legalidad de que trata el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, fue incluido en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011³, que, además, precisó que la autoridad judicial debía asumir de oficio el conocimiento del asunto, en caso de que la entidad administrativa no efectuare el envío del acto sujeto a control.

³ “ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”.

Bajo ese panorama normativo se puede afirmar que, los actos administrativos que están sujetos a control inmediato de legalidad deben cumplir dos características: **i)** ser de carácter general y **ii)** ser expedidos en desarrollo de los decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República.

Sobre la segunda característica, téngase en cuenta que el acto administrativo deberá contener disposiciones que estén encaminadas a permitir la ejecución o aplicación del decreto legislativo (en ello consiste su desarrollo).

4. Caso concreto

Es sabido que el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con miras a atender la crisis económica y social derivada de la pandemia Covid-19, y en virtud de ello expidió varios decretos legislativos en el lapso comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2020. De la misma manera, por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, nuevamente el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con similares propósitos, esto es para conjurar la crisis generada por esta pandemia e impedir la extensión de sus efectos, por el término de treinta (30) días calendario en todo el territorio nacional, lapso comprendido entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020.

En el caso bajo estudio, la administración municipal del Municipio de Ulloa, Valle del Cauca, remitió para el trámite de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011⁴, el Decreto No. 036 de mayo 13 de 2020 **“Por medio del cual se reglamentan las sesiones presenciales ordinarias del mes de mayo de 2020 del Concejo Municipal de Ulloa Valle”**, expedido por el Alcalde Municipal del municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

El citado acto administrativo fue proferido, como lo enuncia su encabezado, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el parágrafo 6 del artículo 3 del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, a los Alcaldes Municipales.

Cabe advertir, que el Presidente de la República, al expedir el Decreto 636, impartió instrucciones a los burgomaestres locales y departamentales, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y esto lo hizo para el

⁴ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Exp. Rad. No. 76001-23-33-000-2020-00650-00

mantenimiento del orden público en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, en su calidad de Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Esto significa, que el mentado decreto 636 no es de carácter legislativo, pues se trata de un decreto ordinario dictado por el Presidente; tanto es así que para el momento en que se expidió, todavía no se había proferido el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, que declaró por segunda vez en esta anualidad, el Estado de Emergencia Económica y Social y Ecológica, en todo el territorio nacional, para tratar de conjurar la crisis generada por esta pandemia e impedir la extensión de sus efectos, por el término de treinta (30) días calendario, lapso comprendido entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020.

Precisamente, el parágrafo 6 del aludido decreto 636, lo que establece es que las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior.

En esas condiciones, encuentra el Despacho del contenido del referido acto administrativo, -Decreto 036 expedido por la Alcaldía Municipal de Ulloa-, que si bien fue dictado en ejercicio de la función administrativa que como primera autoridad local compete al Alcalde Municipal, no lo fue en desarrollo de los Decretos Legislativos dictados por el Presidente de la República durante la declaratoria del Estado de Excepción a través de los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.

Ciertamente el referido decreto, lo que hace es permitir la realización de las sesiones presenciales ordinarias del Concejo Municipal de Ulloa, bajo unas estrictas medidas de bioseguridad sanitaria, en consonancia con los protocolos que al efecto se han diseñado por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y demás autoridades sanitarias del país, a fin de proveer disposiciones sanitarias y acciones transitorias con ocasión de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19.

En ese sentido es claro, que el mencionado acto administrativo no es susceptible del control automático de legalidad que ordenan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, pues el mismo fue expedido en desarrollo de las facultades constitucionales y legales conferidas al Alcalde de Ulloa, como primera autoridad administrativa de dicho municipio, dentro de los parámetros establecidos por el

ordenamiento jurídico, para posibilitar la mitigación y control de la pandemia en dicho ente territorial.

En consecuencia, el Decreto No. 036 de mayo 13 de 2020 “**Por medio del cual se reglamentan las sesiones presenciales ordinarias del mes de mayo de 2020 del Concejo Municipal de Ulloa Valle**”, expedido por el Alcalde Municipal del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, no es susceptible del control inmediato de legalidad de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior sin perjuicio del control judicial que se pueda ejercer sobre este acto administrativo a través de los medios de control ordinarios respectivos, previstos en Ley 1437 de 2011 -CPACA-.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. NO AVOCAR el conocimiento de control inmediato de legalidad del el Decreto No. 036 de mayo 13 de 2020 “**Por medio del cual se reglamentan las sesiones presenciales ordinarias del mes de mayo de 2020 del Concejo Municipal de Ulloa Valle**”, expedido por el Alcalde Municipal del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, acorde con lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. La presente decisión se toma sin perjuicio del control judicial que pueda ejercerse contra dicho acto administrativo, a través de los medios de control ordinarios, previstos en la Ley 1437 de 2011.

TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, se ordena que la presente decisión sea notificada por vía electrónica a la autoridad remitente (Alcalde del Municipio de Ulloa), y a su vez que sea publicada junto con el decreto en mención, en el portal web de esta Corporación Judicial.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado